

En el año del coronavirus: algunas cuestiones a considerar sobre la economía peruana

Armando Mendoza Nava

Sumilla

Nadie podía imaginar que este 2020 iba a estar marcado por una pandemia global, cuyos profundos efectos en la salud pública, la economía y una multitud de otras áreas, están aún por verse en su totalidad. En un Perú paralizado durante meses y que recién está tratando de reconstruir una suerte de «normalidad», la pandemia y sus secuelas levantan una serie de cuestiones sobre la fortaleza de la economía y las cuentas fiscales, nuestras perspectivas de recuperación y la solvencia del modelo bajo el cual se ha regido la economía en las últimas décadas.

SIEMPRE ES COMPLICADO ESCRIBIR SOBRE FENÓMENOS que aún están en desarrollo y cuya trayectoria y resultados finales entran en el campo de la incertidumbre. Tal es el caso hoy con la pandemia de COVID-19. Esa enfermedad que con una rapidez pasmosa paso de ser una noticia lejana proveniente de China a convertirse en una pandemia global y en el mayor desafío que la humanidad en su conjunto ha encarado en décadas.

En el caso del Perú, la COVID-19 viene marcando un dramático antes y después en nuestra realidad. El impacto de la pandemia no se ha limitado a lo meramente sanitario, sino que ha abarcado la totalidad del escenario sobre el que transcurría la vida nacional, transformándolo radicalmente. La pandemia se ha convertido en una suerte de prueba ácida que ha disuelto una multitud de parámetros y paradigmas en los más diversos rubros, incluyendo el económico.

Bajo el impacto de la COVID-19 están crujiendo los supuestos sobre los cuales por muchos años se ha asentado nuestra política económica. La aparente fortaleza y resiliencia de nuestro aparato productivo ya no genera tanta certeza. La tan celebrada solidez fiscal muestra preocupantes limitaciones. La supuesta eficiencia y transparencia de los mercados es mucho menos creíble. Surgen entonces preguntas incómodas sobre la real efectividad y sostenibilidad del llamado «modelo» económico. De igual modo,

la pandemia y sus secuelas han expuesto las múltiples deficiencias e insuficiencias del Estado.

Ciertamente, estas brechas existentes entre los supuestos y las realidades no eran para nada desconocidas, aunque en el pasado con demasiada facilidad fueron minimizadas y soslayadas. Hoy se constata, sin sorpresa, que nuestra realidad es (y ciertamente siempre fue) muy diferente a la proclamada desde el triunfalismo de la tecnocracia y de las elites. El Perú no es ni una potencia económica emergente, ni un flamante integrante del mundo desarrollado. Somos, seguimos siendo, un país a medio camino del desarrollo, con una economía dependiente y vulnerable, que ha disfrutado de periodos de auge, los cuales no hemos sabido aprovechar. Sin duda, en estos años hemos registrado avances, pero estamos lejos de haber resuelto las desigualdades estructurales y profundas que nos aquejan.

En este panorama complicado y volátil, la marcha de la economía en lo que queda del 2020 y en los próximos años va a depender de manera considerable de una serie de factores, internos y externos, cuyo comportamiento es impredecible. Nadie sabe a ciencia cierta cómo evolucionará la producción, la demanda, la inversión, etc., en el Perú. De igual forma, no se sabe qué sucederá con la economía global, hasta dónde llegará su caída y cuánto tardará en recuperarse. Por todo ello, se requiere de una estrategia clara y coherente para reactivar nuestra economía.

En el marco de la crisis de la COVID-19, el gobierno de Martín Vizcarra ha planteado una estrategia de estabilización y reactivación económica, con un amplio y ambicioso abanico de programas y acciones para lo que resta de su periodo presidencial. Reactiva Perú, Arranca Perú, Fondo de Apoyo MYPE, Fondo de Apoyo Agro, Fondo de Apoyo Turismo, etc. Así, las etiquetas y las iniciativas se multiplican, pero, ¿qué hay realmente detrás?

Por supuesto, es necesario que ante la pandemia exista una respuesta estatal para aminorar su impacto sobre la economía y

la sociedad. El problema es que hasta ahora la respuesta desde el Estado, más allá de los esfuerzos y las buenas intenciones, está lejos de ser suficiente. Ha habido indudables aciertos, pero también yerros y omisiones, que en algunos casos expresan problemas de fondo con las políticas públicas que vienen de mucho antes de la pandemia. Entonces, existen legítimas interrogantes sobre la efectividad, viabilidad y sostenibilidad de las medidas de reactivación que el gobierno ha emprendido, así como preocupación sobre la legitimidad y transparencia con la que se desarrollarán dichas medidas.

Sin duda, la economía peruana se encuentra en un momento que constituye una suerte de parteaguas histórico. Las decisiones y medidas que se tomen ahora afectarán profundamente nuestro rumbo futuro, no solo en lo económico, sino en prácticamente todos los aspectos relevantes de la vida nacional, que directa e indirectamente se vinculan con la generación, distribución y disfrute de la riqueza. Con reformas estructurales adecuadas, el Perú pos-COVID-19 podría ser un país más equitativo e inclusivo, con una economía más equilibrada y resiliente. Pero también, si se falla en adoptar medidas de fondo para una real reforma y transformación, podríamos terminar siendo más de lo mismo: un país marcado por brechas y exclusiones aún más profundas y extensas, y, en lo económico, ser aún más frágiles y dependientes.

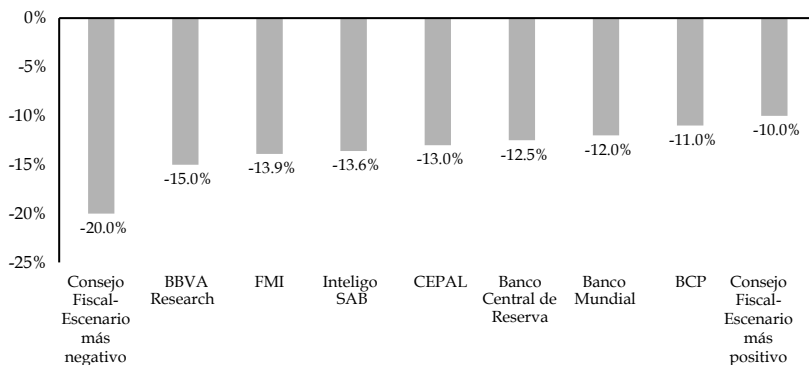
Por ello, una discusión franca sobre la economía peruana, su realidad y posibilidades, exige asumir una serie de cuestiones críticas sobre la forma en que se han construido las estructuras económicas y sus implicancias para el país en un 2020 marcado por la COVID-19, y en adelante. Solo así, asumiendo lo que somos como economía, podremos reconocer qué se puede y qué no se puede hacer, desde el Estado y la sociedad, para no derrapar en el camino de la recuperación y superar este año terrible de la pandemia.

Primera cuestión: no engañarse, la caída será inevitablemente profunda

Lo primero a señalar es probablemente lo más evidente: el Perú se enfrenta a una crisis económica sin precedentes en nuestra historia reciente. Aunque recién se cuente con cifras preliminares y estemos aún lejos del final de la crisis, es indiscutible que las medidas de aislamiento social y confinamiento obligatorio, aunque inevitables, han impactado severamente en el aparato productivo. La pregunta es qué tan severo y persistente será dicho impacto.

Las perspectivas no son esperanzadoras. Se reconoce que este 2020 la contracción económica alcanzará un nivel no visto desde la Guerra del Pacífico. Las diversas proyecciones de escenarios disponibles a julio coincidían en un panorama sombrío (ver el gráfico n° 1). Comprensiblemente, desde el gobierno se ofrecen estimados relativamente moderados, pero ni siquiera las aproximaciones más benévolas pueden obviar el derrumbe económico que sufriremos este año.

Gráfico n° 1
Sin espacio para el optimismo
Proyección de caída del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2020



Un ejercicio razonable de trayectorias posibles para la economía sugiere que la contracción del producto podría ubicarse alrededor del -15%, resultado desastroso desde cualquier punto de vista, más aún si se toma en cuenta que el Perú se perfila, dentro de la región, como el país que sufrirá la mayor contracción en el 2020. Así pues, la supuesta fortaleza de la economía peruana ha resultado ser una mera cobertura, bajo la cual se esconde una gran vulnerabilidad.

Más aún, hay que tener en cuenta que las proyecciones disponibles hasta ahora asumen que la evolución de la pandemia ya alcanzó la famosa «meseta» y que los indicadores sanitarios en los próximos meses se mantendrían más o menos estables. Pero la realidad nos está desengañando rápidamente de dicha creencia. El Perú empezó a levantar las restricciones a las actividades cuando aún estábamos en fase ascendente en los indicadores de contagios y hospitalizaciones. Apremiados por las presiones económicas y sociales de arriba y abajo, hemos ido a contracorriente del mundo y, literalmente, nos la jugamos. De darse un recrudecimiento de la crisis sanitaria en los próximos meses, la caída de la economía podría alcanzar niveles inimaginables.

Ante un escenario en donde lo incierto y lo sombrío se mezclan en partes iguales, la regla de oro para las políticas públicas tiene que ser asumir el peor escenario posible y prepararse en consecuencia. Así, las proyecciones macroeconómicas, los estimados de ingresos fiscales, el planeamiento presupuestal, etc., tienen, como nunca, que teñirse de cautela. La responsabilidad frente al país demanda que se deje de lado el optimismo sin sustento. «Esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor» es un viejo refrán que hoy es más pertinente que nunca.

Segunda cuestión: la recuperación no será rápida, fácil o automática

Seamos realistas: el fin de la emergencia sanitaria no significa el final de la recesión. Tomará tiempo para que la economía recobre sus niveles anteriores a la COVID-19, así que nuevamente hay que evitar el optimismo sin base. Los problemas no resueltos de vulnerabilidad y dependencia del aparato productivo nacional nos perfilan hacia un escenario en donde la trayectoria de la economía estará muy probablemente marcada por una gradual recuperación, la cual no estará exenta de estancamientos y altibajos.

No tiene caso ilusionarse con un rebote rápido de la economía, en V, similar a lo que se observó en el 2008-2009. El contexto y las condiciones, internas y externas, que existían hace una década, ya no existen hoy. No podemos apostar a que la crisis global se quede focalizada, ni a una recuperación rápida de los precios internacionales. Hoy las condiciones son diferentes y poco, o nada, favorables.

Ciertamente, lo más probable es que tras un 2020 de pesadilla, las cifras económicas en el 2021 sean sensiblemente mejores. Pero en buena parte esta recuperación de las cifras será un efecto estadístico. Tras haber tocado fondo, vamos a recuperar algo de terreno en la medida en que los sectores vuelven a ponerse en marcha, aunque estaremos lejos de retornar a la situación previa a la pandemia¹. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que tras una reducción del 13.9% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2020, la economía peruana crecerá 6.5% en el 2021². La cuestión es qué pasará con ese 7.5% de pérdida neta. ¿Cuánto tiempo nos tomará recuperarlo? Con una combinación feliz de estabilización sanitaria, políticas públicas idóneas y un contexto externo

¹ Banco Mundial. *Global Economic Prospects - June 2020*. Washington D.C.: Banco Mundial, 2020. En: bit.ly/33fEkbm

² Werner, A. «Perspectivas para América Latina y el Caribe: La pandemia se intensifica». *blog-dialogoafondo.imf.org*, Washington D.C., 26 de junio del 2020. En: bit.ly/30ieEJu

favorable, en ausencia de mayores contratiempos, se podría pensar que nos recuperaríamos a niveles pre-COVID-19 para el 2022-2023. Pero eso sería en el mejor de los casos.

Se impone una perspectiva sobria con relación al proceso de recuperación pos-COVID-19. Recordemos que previo a la pandemia, el Perú ya arrastraba varios años de crecimiento anémico, sin generación de empleo adecuado ni impacto social sustantivo. En el contexto actual, si al impacto mismo de la pandemia hay, además, que sumar otros factores desfavorables, como medidas de política contraproducentes, restricciones fiscales severas o un empeoramiento del panorama externo, entonces podría suceder que nos tome la mayor parte de la presente década para recuperarnos del todo.

Nuevamente, se requiere de políticas que se sustenten en el realismo y la perseverancia. Evitar establecer metas irreales, que se expliquen más por un afán político que por un análisis serio. Reconocer que la recuperación económica se extenderá más allá del 2021 es un paso necesario para lograr, ojalá, algún consenso entre nuestra maleteada clase política, de cara al siguiente periodo presidencial. Así quizá, quien suceda a Vizcarra, en lugar del acostumbrado «borrón y cuenta nueva», pueda impulsar una agenda nacional compartida por los diversos sectores políticos y sociales. Conociendo la forma en que se hace (y se deshace) la política en el Perú, será difícil que tal consenso se alcance, pero vale la pena que se intente.

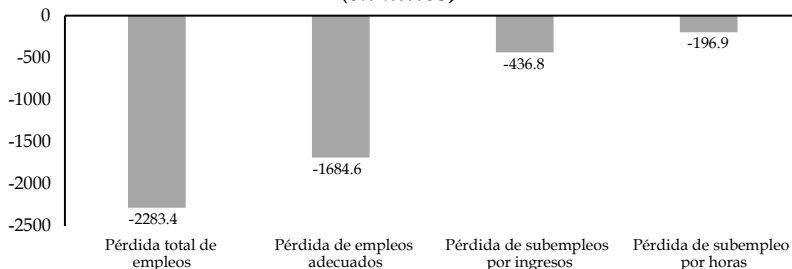
Tercera cuestión: salvo el empleo (de calidad), todo es ilusión

La caída del empleo debido a la paralización de la economía solo puede describirse como brutal. La exacta dimensión de la pérdida de puestos de trabajo aún no ha sido propiamente determinada, pero la información preliminar no deja lugar a dudas.

Tan solo en Lima Metropolitana, para mayo del 2020, se habían perdido 2.3 millones de puestos de trabajo. Así, en escasamente un trimestre, uno de cada dos trabajadores/trabajadoras perdió su empleo y, por ende, la fuente primaria de subsistencia para él/ella y su familia³.

Igual de preocupante es que la pérdida de empleos adecuados ha sido mayor que la de subempleos y que, además, se observa una fuerte caída en el ingreso de quienes aún conservan su trabajo, todo lo cual agrega a un panorama laboral desolador (ver el gráfico n° 2). Al ser el empleo el vaso comunicante entre la situación económica y la situación social, esta pérdida masiva de puestos de trabajo se traducirá, más temprano que tarde, en el desplome de los indicadores sociales críticos: pobreza, salud, nutrición, entre otros.

Gráfico n° 2
Una hemorragia laboral
Pérdida de empleos en el periodo marzo-mayo 2020
(en miles)



Elaboración propia.

Pero sería mentir el decir que los problemas del mercado laboral se iniciaron con la llegada de la COVID-19. Previo a la pandemia, el empleo en el Perú ya padecía de graves problemas de informalidad, inadecuación y exclusión, siendo la precariedad y el subempleo

³ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana N.º 06. Junio 2020*. Lima: INEI, 2020.

la norma para la enorme mayoría de las y los trabajadores. En particular, la informalidad laboral, persistente y endémica, que afecta a más del 70% de la población ocupada, es uno de los grandes problemas irresueltos de la economía peruana.

La perniciosa presencia de la informalidad está directamente vinculada con la persistencia de la pobreza, el subdesarrollo y la marginalidad, entre otros problemas de larga data en el Perú. De hecho, todo indica que la informalidad es un factor clave que explica por qué las medidas de aislamiento e inmovilidad, adoptadas contra la COVID-19, resultaron poco efectivas. Así pues, ante la realidad de una mayoría de peruanos y peruanas que subsisten día a día en base a empleos precarios, poco pueden las consideraciones sanitarias.

La recuperación económica y social del Perú pasa indiscutiblemente por recobrar el empleo. Generar puestos de trabajo, así sean temporales, tiene que ser la absoluta prioridad. Así parece haberlo entendido el gobierno, según lo expresan diversas medidas, como el Programa de empleo temporal «Trabaja Perú». Pero, a pesar de que estas iniciativas, de alcance y recursos limitados, van en la dirección correcta, no son suficientes.

La tarea que está pendiente es el reenfoque de las políticas públicas, dirigiéndolas hacia aquellos sectores olvidados en donde se concentra el empleo. Estamos hablando de la agricultura familiar, los pequeños negocios y los servicios independientes, los cuales, en el pasado, no han sido prioritarios para un Estado que normalmente se ha concentrado en promover a la gran inversión intensiva en capital y no tanto en mano de obra. Eso debe cambiar.

También tiene que cambiar el enfoque simplista donde lo que interesa es la cantidad y no la calidad del empleo. Una reactivación económica basada en un mayor deterioro y precarización de los estándares laborales, en nombre de la «competitividad», poco o nada contribuirá al bienestar social. En un contexto en que la recesión de la economía empuja a la baja los niveles de ingreso y

las condiciones de trabajo, se necesita que el gobierno tenga mano firme para regular un mercado laboral habituado a la ley de la selva. Es por ello que reforzar la fiscalización laboral y los procesos de formalización efectiva del empleo son tareas urgentes.

Lamentablemente, movidas como el controvertido nombramiento del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en el efímero gabinete dirigido por Pedro Cateriano, generan el temor de que nos encontremos a las puertas de un proceso de flexibilización laboral extrema e indiscriminada, que desproteja, aún más, al trabajador en nombre de una supuesta competitividad, que no es otra cosa que el reciclaje del viejo y desprestigiado concepto del «cholo barato». Ojalá no ocurra tal y el gobierno impulse un justo medio, difícil pero alcanzable, balanceando los inalienables derechos del trabajador/trabajadora con la eficiencia de las actividades productivas. Habrá que ver si el gobierno tendrá la capacidad y el temple para buscar ese justo medio.

Cuarta cuestión: no somos tan solventes como creíamos y eso lo estamos pagando

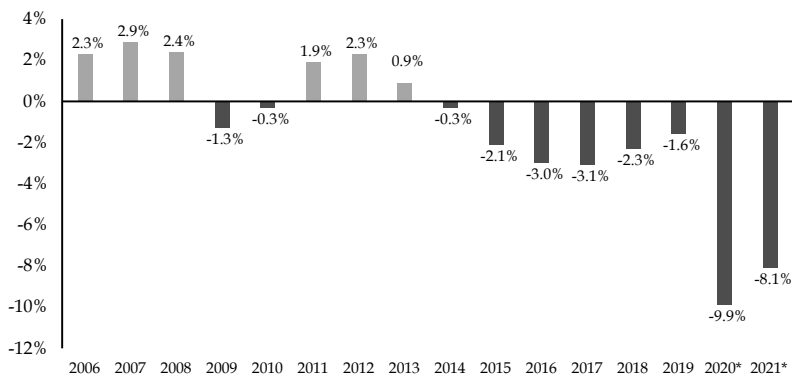
Cuando arribó la pandemia al país, el discurso común de los altos funcionarios del gobierno y los organismos multilaterales era que el Perú contaba con la solvencia fiscal suficiente para hacer frente a las demandas de la crisis, congratulándose por la fortaleza de las cuentas públicas. Desde entonces, esa visión ha sido parcialmente validada: se ha podido contar con los ahorros y reservas para cubrir los requerimientos del corto plazo. Pero es evidente que dichos recursos están lejos de ser suficientes y no queda claro cómo y quién financiará lo que será, necesariamente, un largo y costoso proceso de recuperación.

La tan mentada solvencia fiscal es una suerte de verdad a medias. Por un lado, es cierto que se pueden contar con los recursos acumulados durante los pasados años de auge. De igual forma la

carga de la deuda pública es aún moderada, representando menos del 26% del PBI⁴. Así, somos clasificados internacionalmente como un país relativamente solvente y de bajo riesgo, lo que nos permite, de momento, acceder a financiamiento a tasas comparativamente menores.

Sin embargo, esta supuesta solidez fiscal también tiene mucho de espejismo. Los niveles de recaudación han sido y son crónicamente insuficientes, muy inferiores a lo que habría sido posible y necesario. En consecuencia, el equilibrio de las cuentas públicas se deterioró considerablemente en años recientes: desde el fin del auge de las materias primas (2013-2014) hemos arrastrado déficits fiscales persistentes. Ahora, con el impacto de la COVID-19 y la recesión, las perspectivas son que en el 2020 y el 2021 el déficit fiscal se disparará hasta niveles cercanos al 10% del PBI (ver el gráfico n° 3).

Gráfico n° 3
No tan solventes después de todo
Déficit fiscal anual como porcentaje del PBI



Elaboración propia.

⁴ Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). *Informe anual de Deuda Pública*. Lima: MEF, 2019.

Cabe señalar que, en ausencia de medidas correctivas, niveles de déficit fiscal cercanos o superiores al 10% del PBI podrían conducirnos a un acelerado proceso de endeudamiento para cubrir las brechas presupuestales. Ya el Consejo Fiscal ha alertado que el peso de la deuda pública podría terminar superando el 50% del PBI el 2021⁵. De suceder, el Perú vería como su solvencia crediticia desaparece rápidamente.

La estabilidad fiscal en el Perú tiene mucho de perversa: su expresión es un Estado que recauda poco y que por ende es un Estado crónicamente desfinanciado. El verdadero costo de esa estabilidad fiscal espuria lo vemos hoy en la paupérrima asignación a la salud pública: apenas 3.2% del PBI, uno de los niveles más bajos de toda la región. Entonces, es así que hemos enfrentado a la que es quizá la peor crisis sanitaria de nuestra historia, con un sistema de salud pauperizado durante décadas. Pero el caso de la salud pública desfinanciada no es único: lo mismo puede decirse de la educación, la protección social, la agricultura, etc., etc., etc. Así pues, este Perú no es tan solvente como se proclamaba.

Hasta el momento, la estrategia de financiamiento de la crisis de la COVID-19 que ha implementado el gobierno ha estado marcada por un pragmatismo de corto plazo: uso de los ahorros fiscales, algunas operaciones de endeudamiento y, particularmente, reconfiguraciones presupuestales, moviendo partidas y recursos aquí y allá, para atender las urgencias. Pero, esta estrategia, por más efectiva que pueda ser en el corto plazo, no da para mucho más. Más aún si se consideran creíbles las promesas que el presidente de la República, Martín Vizcarra, formuló en su discurso del pasado 28 de julio. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), que ciertamente es bienvenida, pero

⁵ Consejo Fiscal. *Informe N° 004-2020-CF. Análisis de escenarios macroeconómicos y sus efectos en las cuentas fiscales ante el COVID-19*. Lima: Consejo Fiscal, 2020. En: bit.ly/39Pb5xl

que si no va acompañada del financiamiento suficiente, no pasara de ser un saludo a la bandera. Y así, muchas otras propuestas.

Quinta cuestión: hay que preguntarse de dónde saldrá el cuero para la correa fiscal

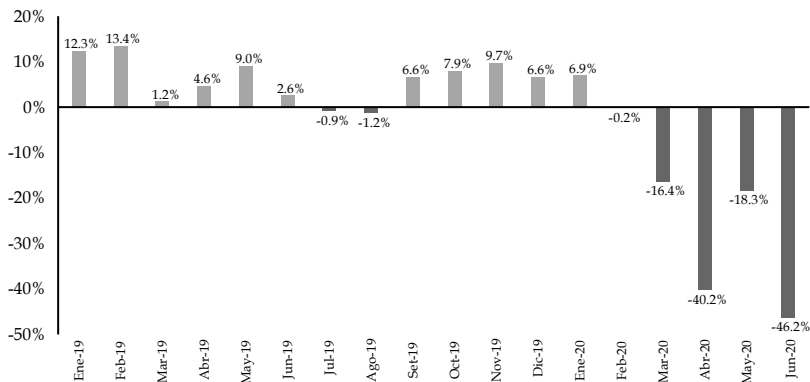
Los persistentes déficits en las cuentas públicas, mencionados en la sección previa, no son más que la consecuencia y el síntoma del gran problema de la fiscalidad en el Perú: su incapacidad para aumentar ingresos, lo que se refleja en una presión tributaria que sistemáticamente ha figurado entre las más bajas de la región. Así, en los *rankings* regionales el Perú figura a la cola por presión tributaria, apenas por encima de un puñado de países más pobres que el nuestro⁶. Entonces, con una presión tributaria que a duras penas representó poco más del 14% del PBI el 2019, sin duda el Estado peruano se encuentra severamente desfinanciado.

Esta situación solo ha empeorado, ¡y de qué manera!, en el 2020. Los resultados preliminares de la recaudación pintan un panorama extremadamente sombrío: en junio los tributos recaudados por el gobierno central se redujeron en más del 40% respecto al mismo mes del 2019 (ver el gráfico n° 4)⁷. Todo indica que resultados similares, o incluso peores, se verán durante el resto del año.

⁶ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). *Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe*. París: OCDE, 2019.

⁷ Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). *Ingresos Tributarios del Gobierno Central: junio 2020*. Lima: Sunat, 2020. En: bit.ly/3jTxlUC

Gráfico n° 4
Al fondo hay sitio
Caída de la recaudación respecto al mismo mes del año anterior



Elaboración propia.

Muchas empresas, pese a volver a la «normalidad», no van a registrar ganancias este 2020, sino pérdidas, por lo que no aportarán impuesto a la renta. Así, la caída de la recaudación podría estar en el rango del 20 a 25%, lo que representaría, contando impuestos y contribuciones sociales, un forado fiscal de S/ 30 mil millones, equivalente a no menos del 4% del PBI que se proyectaba para este año.

En ausencia de medidas relevantes desde el gobierno, lo más probable es que la tributación no se recupere por un buen tiempo, a la par de una estabilización y reactivación económica y social que va a seguir demandando ingentes recursos, muy por encima de las actuales posibilidades del Estado. En su mensaje del 28 de julio, Vizcarra anunció ambiciosos objetivos de inversión en salud, educación, subsidios a familias, etc. Todo eso está muy bien, pero no va a salir gratis. Tan solo incrementar el financiamiento de la salud y la educación pública hasta alcanzar niveles mínimos aceptables, en línea con los estándares regionales,

exigirá anualmente un adicional equivalente al 5% del PBI. Sin una adecuada reforma fiscal, la iniciativa Pacto Perú que ha anunciado Vizcarra para reducción de la pobreza, mejora de la educación y fortalecimiento de un sistema de salud unificado, estará condenado a seguir el mismo sendero intrascendente que su predecesor, el Acuerdo Nacional.

La salida razonable, dada la necesidad de ampliar el gasto público sustancialmente, es incrementar los ingresos fiscales. En ausencia de una conjunción de los astros que nos regale un nuevo auge de las materias primas, se necesita emprender una reforma tributaria; ese término que tanto aterriza y escandaliza a los círculos del poder en el Perú. Lamentablemente, las señales hasta ahora son de que el gobierno no está muy dispuesto a comprarse ese pleito. Pero ese es un pleito que puede y debiera darse.

Siendo realistas, con una economía en crisis profunda no se puede esperar que la recaudación se recupere en el corto plazo. Pero sí se puede aprovechar el momento actual para replantear la naturaleza y estructura de nuestro sistema tributario, resolviendo problemas y deficiencias que nunca fueron propiamente abordadas. Asumiendo el 2020 como una suerte de año cero, con una cuasi amnistía fiscal, es posible introducir medidas que a partir del 2021 permitan incrementar paulatinamente la presión tributaria, no solo hasta alcanzar los niveles previos a la pandemia, claramente insuficiente, sino elevarla en el mediano plazo hasta llegar a un nivel mínimo del 18% del PBI, indispensable para financiar la reconstrucción económica y social.

Una reforma tributaria integral debería incluir entre sus componentes centrales la racionalización de los beneficios tributarios; mejorar la captación sobre la riqueza personal, ya sea a través de nuevos tributos o mejorando el alcance de los ya existentes, como el predial; la revisión del régimen tributario de sectores claves como las industrias extractivas; y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Evidentemente

este esfuerzo tributario debería tener como indispensable complemento legitimador mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público.

Pero lo cierto es que las medidas mencionadas para mejorar la recaudación son receta harto conocida. Lo que hasta ahora ha faltado ha sido voluntad política para impulsar una reforma tributaria, pues ello pisaría en serio los callos del poder económico y político. Hasta el momento, las señales del gobierno en ese tema indican que no hay muchas ganas de dar pelea. Los desencuentros que en su momento se dieron entre el presidente Vizcarra, el entonces premier Vicente Zevallos y la ministra de Economía, María Antonieta Alva, alrededor del controvertido tema del «impuesto solidario», más allá de lo anecdótico, no dan para esperanzarse con que en lo que queda del presente gobierno se emprenda una reforma tributaria.

Sexta cuestión: la revisión del «modelo», ¿para cuándo?

La crisis de la COVID-19 no es un fenómeno aislado y coyuntural. Por el contrario, su impacto se ha extendido a lo económico y social, convirtiéndose en un catalizador que ha expuesto las múltiples fallas y carencias vinculadas al llamado «modelo», establecido desde los años 90. Así, la pandemia y sus secuelas se han convertido en el test ácido de las estructuras económicas levantadas en las últimas décadas.

Y es que ese «modelo», tan alabado por el crecimiento económico, el auge exportador y las grandes reservas acumuladas, es también el «modelo» de la salud pública desfinanciada, del Estado inoperante, de los abusos del mercado, de la informalidad extendida y la precariedad laboral. Esos problemas, que durante los años felices y triunfalistas del auge de las materias primas fueron ignorados o minimizados, hoy nos estallan en la cara.

Desde el fin de dicho auge, a partir del 2014, frente al estancamiento económico y social no ha habido capacidad de respuesta por parte de una tecnocracia y un empresariado que se han ceñido a un libreto ortodoxo que no supera la nostalgia de la prosperidad falaz. La actual crisis debería ser la oportunidad para replantear nuestro camino hacia el desarrollo, para revisar y corregir el manejo de la economía, con criterio y sin prejuicios, manteniendo y mejorando lo que ha funcionado y reemplazando lo que ha fallado.

Lamentablemente, es poco probable que un proceso de reflexión y replanteo ocurra. La impresión que surge a partir de los anuncios desde los altos niveles del gobierno es que lejos de cuestionar los parámetros bajo los cuales se ha manejado la política económica, se ha optado por la defensa a ultranza de dichos parámetros: el motor es la gran inversión privada, nuestro futuro está en las actividades extractivas, nuestra competitividad pasa por el desmantelamiento de regulaciones laborales y ambientales, no se requiere una reforma fiscal.

En el Perú, la discusión de la política económica desde hace buen tiempo se encuentra varada debido a la cerrazón ideológica, que rehúsa reconocer errores y se aferra a la inercia, pero también debido a los intereses de aquellos que se benefician, porque siempre hay alguien que se beneficia, de una economía a medio hacer, ineficiente, distorsionada, de poco vuelo. Así, los problemas de la ineficiencia, informalidad, colusión, etc., que han sido largamente diagnosticados y cuyas soluciones también son conocidas, se perpetúan por una combinación de falta de criterio, incapacidad y desinterés de los altos círculos de la economía y la política nacional.

Es así que, en un momento crucial para el país, en donde debería haber la claridad y la decisión para plantear reformas necesarias, lo que vemos es una suerte de silencio compartido para que todo siga igual y nada cambie: un gobierno que con cada día está más de salida y que parece estar agotando sus reservas

de rebeldía; una tecnocracia sin respuestas, pero empeñada en preservar su reputación de tutores de un auge ya pasado; y un sector empresarial que en buena cuenta se acostumbró tanto a una economía sucia e ineficiente, que, como en los malos romances, terminó encontrándole el gusto. Así, entre la displicencia, la resignación y el oportunismo, hay poco espacio para esperanzarse con reformas de fondo.

A modo de conclusión: pensar fuera de la caja

Para enfrentar y superar la crisis actual se requiere, qué duda cabe, de capacidad para pensar diferente y de apostar por el cambio. El problema es que se apunta, según vemos hasta el momento en el marco de la reactivación anunciada por el gobierno, en lo fundamental, a una repetición de la estrategia del «chorreo»: acumular recursos y apoyo en los sectores que concentran al gran capital, principalmente sectores extractivistas, asumidos como los motores que harán despegar a la economía.

Reflejo de ese sesgo es el enorme volumen de recursos (S/ 60 mil millones, casi 9% del PBI) que han sido dirigidos a apuntalar al gran sector financiero y a sus clientes preferenciales, en comparación a lo que va dirigido a las pequeñas y microempresas, las cuales escasamente recibirán la centésima parte de recursos. De igual forma, el discurso gubernamental, con su énfasis en el destrabe de las inversiones, apunta a que probablemente lo que se verá en los próximos meses será una fuerte presión dirigida al relajamiento y eliminación de regulaciones y estándares, en el nombre de la reactivación.

Cabe recalcar que esta receta que propone el gobierno ya se ha usado antes, más recientemente en el 2014-2015, sin arrojar buenos resultados. Es probable que la apuesta de hoy fracase por las mismas razones que se fracasó en el pasado: muchos de los sectores de la gran empresa a los que apuesta la reactivación no

están muy articulados al resto de la economía, no son grandes generadores de empleo o demanda, o su reactivación depende de factores externos, como los precios internacionales. Agreguemos que, en el escenario actual, es natural que predomine la cautela entre los agentes económicos.

Así, lo más probable es que más allá de las promesas y las altas expectativas que ha puesto el gobierno en la inversión privada, esta no se recupere por un buen tiempo, no produciéndose, una vez más, el famoso «chorreo». Más aún, si se considera que parte de la gran empresa nacional es poco competitiva, adversa al riesgo y malacostumbrada a las prácticas rentistas, careciendo del dinamismo y espíritu emprendedor que se requiere ahora. Entonces, en estas condiciones, difícilmente será la gran inversión privada la que saque adelante al país.

Sería lamentable que las limitaciones del Estado para alcanzar y apoyar a los sectores más vulnerables se combinen con un fallo para arrancar la economía de forma rápida y robusta. Entonces, como en el pasado, será el pobre y excluido el gran perdedor en esta crisis. Pero ello no tiene que ser necesariamente así. Otro rumbo es posible, pero evidentemente ello implica voluntad política para que el proceso de reactivación no se convierta en otro episodio de profundización de las desigualdades, como en el pasado.

Una agenda de cambio estructural va a ser, necesariamente, extensa y diversa y, en muchos aspectos, tomará tiempo antes de cuajar plenamente. Pero justamente por ello, es por lo que debe aprovecharse esta coyuntura de crisis de las estructuras imperantes, para emprender las reformas necesarias en áreas críticas. Ya se ha mencionado la reforma del sistema tributario como un elemento indispensable para garantizar la sostenibilidad de la reconstrucción. De igual manera, la diversificación productiva, la construcción de resiliencia económica, la reducción de la informalidad, una reforma del sistema previsional que no sea una privatización camuflada, son otros temas prioritarios para abordar. Los resultados no serán

necesariamente fáciles o inmediatos, pero para echar a andar al país se empieza dando un primer paso.

También es cierto que el gobierno de Vizcarra dista de ser el actor ideal para empujar el cambio. La precariedad de sus cuadros, el apoyo político tenue, la dispersión de su agenda y, sobre todo, el poco tiempo que le queda, son todos elementos que hacen difícil contar con que este gobierno sea el gran reformador que el país requiere. La misma propuesta de Vizcarra de establecer el Pacto Perú, un consenso entre fuerzas políticas de agenda pos-2021, refleja de alguna manera que su espacio de acción para empujar reformas de fondo por iniciativa propia es reducido, al menos en lo económico.

Debería ser posible que desde este gobierno se combinen medidas de corto plazo en el marco de la reactivación, con iniciativas que apunten a un horizonte de más largo plazo, con procesos de cambio que vayan más allá de julio del 2021. Claramente, se necesita establecer una agenda de reforma que dé espacio para estos procesos. Si el llamado Pacto Perú efectivamente culmina en acuerdos concretos, o simplemente resulta otro saludo a la bandera, se verá pronto.

Es evidente que será muy difícil lograr consensos en un ambiente político marcado por el desorden, la disidencia, el extremismo y, también, por la venalidad. Pero se puede intentar. Sería trágico llegar al bicentenario de la Independencia siendo el mismo país caótico, desigual y dividido que éramos 200 años atrás. El Perú que hoy encara una crisis sin precedentes con esa combinación de improvisación, desorden e ineficiencia, que nos resulta tan familiar, tiene que cambiar para bien. Pese a todo, las posibilidades, nuestras posibilidades, siguen ahí, intactas.